



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EXPTE: 43581/2022**

**“DISPROFARMA SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social a fin de dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:**

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por DISPROFARMA SA contra la resolución administrativa 2281/2022 que, al confirmar una anterior, determinó la existencia de deuda por haber omitido el ingreso de **aportes y contribuciones** a la seguridad social por la suma de \$ 612,04 (capital) \$ 2.946,20 (en concepto de intereses) y \$ 614,04 por **multa respecto del trabajador Edgardo Javier López correspondiente a los periodos 05/2008 a 08/2008.**

Entre los argumentos vertidos en su memorial de agravios DISPROFARMA SA sostiene que se la pretende responsabilizar sin argumento válido por omisiones en que habría incurrido al no denunciar como dependiente al Señor Edgardo Javier López cuando en realidad dicha persona nunca figuró en la nómina de dependientes suyos.

Explica que en realidad el Señor López formó parte del personal de Work Time SA, empresa con la que Disprofarma eventualmente contrató para la prestación de determinados servicios, y es a partir del dictado de una sentencia recaída en el fuero laboral, que el organismo tuvo por acreditada la existencia de una relación de trabajo y la responsabilidad solidaria entre ambas personas ideales, pretendiendo imputarle el no cumplimiento de obligaciones, que a su juicio, no le corresponden, motivo por el cual alega la falta de motivación del acto administrativo que ataca por nulo. Por otra parte, solicita se considere prescripto el reclamo de AFIP, fundamentando su postura en lo establecido en el artículo 16 de la ley 14.236.

AFIP rechaza el anterior planteo al entender que la determinación de deuda y multa efectuadas tuvieron su origen en una sentencia laboral en la que se reconoció la responsabilidad solidaria de la impugnante, en los términos del artículo 29 de la LCT. Relata que al quedar acreditada la relación de dependencia no denunciada en su momento por la impugnante, surge una acción por cobro de contribuciones, multas y demás obligaciones previsionales. El organismo invoca





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

que para configurarse la defensa liberatoria que esgrime el accionante deben darse dos elementos: el transcurso del tiempo y la conducta omisiva del titular del derecho, requisitos que no se cumplen en el caso de autos, pues la notificación de la sentencia constituye el elemento determinante que interrumpió el plazo prescriptivo. Agrega que resulta irrazonable atribuirle inactividad al organismo cuando éste desconocía la deuda existente debido a la inconducta del supuesto deudor. La circunstancia que recién frente al pronunciamiento judicial el organismo tome conocimiento de la existencia de un hecho imponible pone en evidencia la dificultad que hasta ese momento ha tenido para el ejercicio de la acción, toda vez que aquel requirió de tales actos para salir a la luz, situación que torna aplicable al caso la dispensa de los efectos de la prescripción transcurrida hasta la toma de conocimiento de aquellos por parte del Fisco. Concluye afirmando que la parte actora no ha logrado acreditar en la causa, la improcedencia del reclamo efectuado.

Desde el punto de vista formal procederé a la apertura de la presente instancia pues el **presentante dio cumplimiento** a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820.

En primer término, corresponde analizar el planteo efectuado por el presentante en cuanto a la presunta nulidad de la resolución recurrida. Concretamente expresa que no se analizó convenientemente la prueba ofrecida en sede administrativa para arribar a la verdad de los hechos acontecidos por lo que la resolución atacada, así como el dictamen jurídico que le sirviera de fundamento, no suministra la motivación que llevó a resolver como se hizo.

Entiendo el planteo no resulta procedente pues no se observa que durante el curso de las actuaciones administrativas se haya afectado la garantía procesal de defensa en juicio y/o se hayan afectado los derechos particulares del emplazado quien tuvo oportunidad de actuar en el proceso administrativo, siendo analizadas sus defensas y procediéndose, a posteriori, al dictado de la resolución que aquí se impugna ya que se consideraron los lineamientos que surgen de la sentencia laboral recaída que condenó solidariamente a la impugnante estableciendo, además la duración del vínculo laboral y la remuneración que percibió el trabajador, extremos también utilizados por los funcionarios intervinientes al momento de labrar las actas.

No se observa base fáctica y/o jurídica para considerar que existió una violación a las reglas del debido proceso administrativo.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento la cuestión a dilucidar radica en resolver si la notificación de la sentencia laboral interrumpió





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

o suspendió el plazo de prescripción respecto a la percepción de los créditos de que se trata, tal como argumenta el organismo interviniente.

En primer término corresponde recordar que la prescripción es un instituto de orden público, y su fundamento va más allá de la pérdida -o en su caso, adquisición- de un derecho por el mero transcurso del tiempo ya que en realidad fue creado para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos, salvaguardando el orden y la seguridad jurídica evitando la prolongación de situaciones cuya indefinición puede llegar a atentar contra derechos patrimoniales y el principio de propiedad a que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Nacional (conf. Borda “Tratado - Obligaciones” Tº II pág. 7; Badeni “Tratado de Derecho Constitucional” Tº II pág. 818; CSJN sent. del 10/08/95 “DGI c/Compañía de Seguros del Interior SA”).

Ahora bien, la sentencia recaída en el ámbito del fuero del trabajo tuvo por acreditada una relación laboral y la solidaridad en los términos del art. 29 LCT entre las empresas WORK TIME SA y DISPROFARMA SA resultando la aquí impugnante deudora solidaria de aportes y contribuciones al sistema previsional (ver sent. de fecha 12/07/2010).

Sabido es que toda acción judicial nace desde el momento en que se origina el crédito, y en materia previsional ello sucede mensualmente o quincenalmente conforme el empleador abone los salarios a sus dependientes originándose la obligación de contribuir al régimen de la seguridad social (art. 79, 80 LCT y 12 ley 24.241).

En el caso bajo análisis la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de fecha 12/07/2010 es declarativa de derechos y no constitutiva de los mismos lo que obsta a que se le asigne un carácter amplio en materia prescriptiva incompatible con los principios reglamentados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Cabe señalar, a mayor abundamiento, que la demanda laboral no puede suspender ni interrumpir el plazo de prescripción ya que conforme el artículo 3991 del Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente al momento de los hechos, la interrupción de la prescripción causada por demanda judicial solo beneficia a quien la entabló por lo que resulta contradictorio que AFIP pretenda beneficiarse con una sentencia judicial dictada en un proceso en el que no formó parte.

Por otra parte los distintos organismos de control gozan de amplias facultades de fiscalización (art.10 de la ley 18.820, art. 23 dto. 507/93 ratificada por artículo 22 de la ley 24.447) como para detectar y perseguir relaciones laborales de carácter clandestino establecidas al margen de la legislación vigente.





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que nos ocupa entiendo que la deuda reclamada no se encuentra prescripta.

Ello por cuanto según los propios dichos de la impugnante el 13/11/19 recibe en su domicilio fiscal un formulario por el que se le reclama la deuda objeto de estos actuados.

Ahora bien teniendo presente que el plazo de prescripción decenal aplicable en autos, sufrió tres suspensiones de un año cada una en virtud de lo dispuesto por las leyes 26.476, 26.860 y 27.562, debe entenderse entonces que el periodo reclamado (05/2008 a 08/2008) no queda comprendido dentro de la prescripción operada, con lo que queda sellada la suerte de la presente impugnación.

Por otra parte, solicita la apelante que se la exima del pago de la multa pretendida, pues según entiende, para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un elemento subjetivo, que podría configurarse con la presencia de falsedad o engaño extremo que en el caso no aconteció.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

Por ultimo y con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad, extensión de la labor realizada, y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte de la parte actora en 4 UMA (\$59.732) y en 6 UMA (\$ 89.598) los correspondientes a la dirección letrada de la demandada, conf. CSJN Ac. 09/2023.

En virtud de lo expresado propongo: 1º) Habilitar la instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas a la impugnante vencida (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en 4 UMA (\$59.732) y 6 UMA (\$89.598) respectivamente, importes a los que se agregará IVA en caso de corresponder.

#### **EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

En atención a que en autos la deuda no se encuentra prescripta, adhiero -en las particularidades circunstancias de la causa- a la solución propiciada por el voto de la Dra. Nora Carmen Dorado.

#### **EL DOCTOR JUAN FANTINI DIJO:**

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37032892#356991605#20230426094904647



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Si bien disiento en cuanto a las consideraciones efectuadas en torno a los efectos de la sentencia laboral en relación con el plazo de prescripción. En este punto, me remito en honor a la brevedad a los fundamentos expuestos en autos “Granja Tres Arroyos S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Impugnación de Deuda” sent. del 25/02/2022, en la que considere que la demanda laboral si interrumpe el plazo de prescripción. En atención a las especiales particularidades, adhiero al voto del Dr. Carnota.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, RESUELVE: 1º) Habilitar la instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas a la impugnante vencida (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora y de la parte demandada en 4 UMA (\$59.732) y 6 UMA (\$89.598) conf. CSJN Ac. 09/2023 respectivamente, importes a los que se agregará IVA en caso de corresponder. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

